

*Misión Permanente del Uruguay
ante la Oficina de Naciones Unidas y
Organismos Especializados*

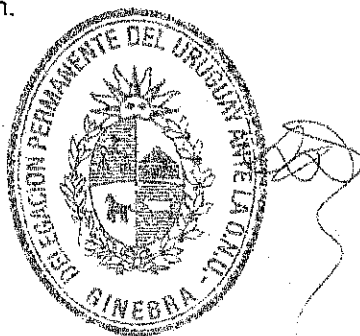


NV/156/13

La Misión Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y de las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –Comité contra la Desaparición Forzada- y tiene el honor de hacer referencia a su Nota CED/SG/GA68 relativa a la resolución A/RES/66/160.

Al respecto esta Misión cumple en remitir la información solicitada, en preparación del Informe del Secretario General de la ONU sobre la situación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

La Misión Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y de las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra hace uso de la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –Comité contra la Desaparición Forzada- las seguridades de su más alta y distinguida consideración.



Ginebra, 11 de junio de 2013

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
–Comité contra la Desaparición Forzada–
Ginebra



- A) Las Medidas adoptadas para considerar la posibilidad de firmar y ratificar la Convención, o de adherirse a ella, como cuestión prioritaria (párrafo 2 de la resolución)

El Estado uruguayo suscribió la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 6 de febrero de 2007 y la ratificó mediante ley 18.420, de 8 de diciembre de 2008.

- B) Las medidas adoptadas para considerar la opción que se establece en los artículos 31 y 32 de la Convención prioritaria (párrafo 2 de la resolución)

En el momento de la ratificación del instrumento, Uruguay realizó la siguiente declaración reconociendo la competencia del Comité de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional:

De conformidad con el artículo 31, apartado 1, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la República Oriental del Uruguay reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado de las disposiciones de dicha Convención.

De conformidad con el artículo 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la República Oriental del Uruguay reconoce la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que el Estado uruguayo no está cumpliendo sus obligaciones en virtud de dicha Convención.

- C) La asistencia pedida y recibida por Secretario General y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pasar a ser parte en la Convención (párrafo 4 de la resolución)**

El Estado uruguayo no se valió de la cooperación técnica internacional para llevar adelante el proceso de ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

- D) La asistencia pedida y recibida por los organismos y las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias en el conocimiento y cumplimiento de la Convención (párrafo 5 de la resolución)**

El Estado uruguayo a través de sus autoridades competentes ha mantenido una política de total apertura y cooperación con Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos así como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos ante los requerimientos de información provenientes del sistema universal de derechos humanos.

Se ha colaborado muy especialmente con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas suministrando toda la información solicitada, poniendo en conocimiento los avances en las distintas investigaciones y esclarecimientos de casos de personas desaparecidas, aportando documentación en los casos que corresponda, etc.

Con Estados de la región se ha procedido al traslado de muestras y perfiles genéticos como información identificativa, colaborando así con los procesos de investigación de otros países, aportando en estos casos la infraestructura necesaria a tales fines.

Por otra parte, dentro del marco de la actual reforma penitenciaria que está llevando a cabo el país, el aporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha permitido incluir toda la normativa referida a la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario y de la presente Convención en los cursos de inducción para los nuevos operadores civiles (1500 personas).

Finalmente, corresponde informar que Uruguay fue el primer Estado Parte en haber presentado en los plazos previstos en la Convención, el Informe Nacional al Comité de Desapariciones Forzadas (habiéndose llevado a cabo el diálogo con dicho Comité en abril de 2013). En la oportunidad los miembros del Comité encomiaron al Estado uruguayo "por haber sido el primer Estado parte en presentar su informe y por

haberlo hecho respetando el plazo previsto por el mencionado artículo 29, párrafo 1, de la Convención".